

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 101
O R D I N A R I A
JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del jueves tres de octubre de dos mil trece, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán. Los señores Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo estuvieron ausentes en la sesión por estar gozando de su período vacacional.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número cien ordinaria, celebrada el martes primero de octubre de dos mil trece.

Por unanimidad de nueve votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves tres de octubre de dos mil trece:

I. 364/2012

Contradicción de tesis 524/2012, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, respectivamente, el amparo directo en revisión 203/2011 y la contradicción de tesis 214/2012. En el proyecto formulado por el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se propuso: *“ÚNICO. No existe la contradicción de tesis, en los términos del considerando cuarto de esta resolución.”*

Dada la ausencia del señor Ministro Pardo Rebolledo, el Tribunal Pleno acordó que el señor Ministro Aguilar Morales se hiciera cargo del asunto. Acto continuo, expuso las consideraciones que sustentan el sentido del proyecto, en el sentido de que se arriba a la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada, en razón de que los criterios contendientes se vincularon con el artículo 52-A del Código Fiscal de Federación mas no se pronunciaron sobre un mismo punto de derecho.

Precisó que la Primera Sala estableció que la facultad de comprobación de la autoridad fiscal contenida en el artículo 52-A del Código Tributario Federal, consistente en requerir al contador público los dictámenes financieros sin prever la obligación de notificar sobre dicho requerimiento de información al contribuyente, no se rige por la garantía de audiencia, puesto que no constituye un acto privativo de

algún bien o derecho del contribuyente, asimismo tampoco constituye una medida definitiva.

Por su parte, la Segunda Sala se pronunció sobre un punto de legalidad al establecer que con la entrada en vigor de la reforma publicada el veintiocho de junio de dos mil seis, el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación se tornó inaplicable en cuanto al lineamiento de notificar al contribuyente, previsto en el artículo 55 del Reglamento de ese mismo Código, porque al modificarse el texto legal, hubo manifestación expresa del legislador en el sentido de que dicha carga quedaría suprimida.

Indicó que la consulta establece que no son óbice para considerar lo anterior: primero, el hecho de que la Segunda Sala abandonara el criterio que había sustentado respecto de que la obligación de notificar al contribuyente persiste en términos del artículo 48, fracción I, del Código Tributario, y segundo, la circunstancia de que la Primera Sala compartiera el texto de la tesis aislada 2a. XLIV/2009 de número 2ª/44/2009, referente a que “acorde con el citado dispositivo legal, cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación revisen los dictámenes de estados financieros, pueden requerir al contador público que los haya elaborado la información o documentos que estimen necesarios para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, sin que establezca la obligación de notificar a éste dicho requerimiento. Por otra parte, es criterio reiterado que la

garantía de audiencia establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente rige respecto de actos privativos; es decir, los que persiguen en sí mismo el detrimento de un derecho del gobernado, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios”, por lo que dicha garantía no rige tratándose del artículo 52-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Señaló que más adelante dice que “si bien no contiene la obligación de notificar al contribuyente sobre la solicitud realizada al contador, lo cierto es que ese deber está expresamente comprendido en los diversos artículos 48 del Código Fiscal de la Federación y 55, fracción I, de su Reglamento, que prevén un procedimiento en el cual la autoridad debe notificar al contribuyente la solicitud de información o documentación vinculada con su situación fiscal.”

Por ello, la consulta propone la inexistencia de una contradicción entre los criterios de las Salas de este Alto Tribunal, pues la Primera Sala citó la tesis aislada de la Segunda Sala para apoyar las consideraciones al resolver el amparo directo en revisión 203/2011, asimismo que las consideraciones de la Primera Sala no guardan relación con lo decidido por la Segunda Sala respecto de la inaplicabilidad del lineamiento de notificar al contribuyente, dispuesto en el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal, ni con el criterio relativo al deber de llevar a cabo la notificación comprendida en los artículos 48 del Código Fiscal y 55 de su Reglamento. Lo anterior deriva de que la

Primera Sala no respondió al planteamiento de constitucionalidad que le fue formulado en el sentido de aplicar ese dispositivo reglamentario o que, a pesar de la entrada en vigor de la reforma publicada el veintiocho de junio de dos mil seis, el artículo 52-A del Código Fiscal sostuviera el lineamiento contenido en la referida norma reglamentaria; por dicha falta de pronunciamiento no se puede deducir que la Primera Sala sustente los criterios emitidos por la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis de su conocimiento y, por ende, no se debe configurar de manera presuntiva la contradicción de tesis, porque se daría mayores alcances a las ejecutorias de los que fueron objeto.

Sometida a votación la propuesta del proyecto contenida en los considerados primero, segundo y tercero, relativos a la competencia, la legitimación del denunciante y la transcripción de las posturas contendientes, en forma económica se aprobó por unanimidad de nueve votos.

Luego, sometida a votación la propuesta del proyecto contenida en el considerando cuarto, consistente en que no existe la contradicción de tesis denunciada, en forma económica se aprobó por unanimidad de nueve votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

II. 5/2012-PL

Contradicción de tesis 5/2012-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación al resolver, respectivamente, el amparo en revisión 1337/2006 y el amparo directo en revisión 1096/2011. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alberto Pérez Dayán se propuso: *“PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis denunciada. SEGUNDO. Deben prevalecer, con el carácter de jurisprudencias, los criterios de este Tribunal Pleno, precisados en el último considerando de esta ejecutoria.”* Las tesis a que hace referencia el resolutivo segundo tienen por rubro *“RENTA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE PROPORCIONALIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DOS).”* y *“RENTA. EL ARTÍCULO 52, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DOS).”*

El señor Ministro Pérez Dayán realizó la presentación del proyecto, reseñando que busca resolver la discrepancia de los criterios, por una parte de la Primera Sala, que declaró inconstitucionales los artículos 47, fracción I, y 52, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir de dos mil dos, en tanto que la Segunda Sala consideró lo contrario.

Para ello, dividió su estudio en dos temas: primero, dilucidar si el artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta transgrede el principio tributario de

proporcionalidad y, el segundo, analizar si el artículo 52, párrafo segundo, del mismo ordenamiento, transgrede el de equidad.

Respecto del primero de ellos, se propone concluir que el artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta transgrede el principio tributario de proporcionalidad, al inferir que las personas morales consideren como créditos las deudas a cargo de personas físicas que no provengan de sus actividades empresariales cuando sean de plazo menor a un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes, para efectos del cálculo por el ajuste anual por inflación. Las consecuencias que se contemplan son, primera, que no se puedan considerar para conocer el promedio anual de deudas y créditos y, por ello, tampoco para realizar el ajuste anual por inflación acumulable o deducible; segundo, que no se tomen en cuenta como partidas deducibles; tercero, que no se incluyan para determinar la base gravable; y cuarto, que todo lo anterior ocasiona que se cubra una cantidad mayor de impuesto, lo cual lo vuelve desproporcional, en virtud de que desconoce la capacidad contributiva real de las personas morales.

En cuanto al segundo tema, se propone declarar violatorio del principio tributario de equidad al artículo 52, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, toda vez que únicamente permite que las instituciones de crédito puedan considerar como créditos los previstos en el artículo 47, fracción I, del ordenamiento invocado, sin

justificación alguna, al excluir a las demás entidades que componen el sistema financiero.

Indicó que para efectos del análisis y discusión del proyecto, se dividió en: los primeros cuatro considerandos con cuestiones procesales; el quinto y sexto atienden a la existencia de la contradicción de tesis, los puntos de derecho que deben ser dilucidados y las normas interesadas con ellos; el séptimo genera una reflexión en torno al ajuste anual por inflación; el octavo analiza el primer punto de contradicción, esto es, el tema de proporcionalidad relacionado al artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; el noveno estudia el segundo punto de contradicción, relacionado con la equidad atinente al artículo 52, segundo párrafo, de la misma ley; y el décimo propone los criterios para dilucidar la contradicción.

Sometida a votación la propuesta del proyecto contenida en los considerados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, relativos a la competencia, la legitimación, la transcripción de los criterios de la Primera Sala, la transcripción del criterio de la Segunda Sala, la existencia de la contradicción de tesis, los puntos de derecho a dilucidar y las reflexiones sobre el ajuste anual por inflación, en forma económica se aprobó por unanimidad de nueve votos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la discusión en torno al considerando octavo del proyecto,

relativo al análisis del primer punto de derecho materia de contradicción: el principio tributario de proporcionalidad.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena señaló que el ajuste anual por inflación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta reconoce el fenómeno económico de la disminución del valor adquisitivo derivado del paso del tiempo, lo que impacta en la contabilidad de una empresa tanto en sus activos como en sus pasivos. A partir de esto, la ley permite calcular una deducción o la acumulación de un ingreso; si los pasivos son mayores a los activos, habrá un ingreso acumulable, debido a que, por el sólo transcurso del tiempo, una persona deberá menos y, por tanto, tendrá un incremento en su patrimonio; y si los activos son mayores que los pasivos, una persona reflejará una merma en sus activos y, por ende, una reducción en su patrimonio.

Indicó que el artículo 47 considera como un crédito, para efectos del cálculo del ajuste anual por inflación, el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad de numerario, entre otros, los que adquieran las empresas de factoraje financiero; luego establece, en su fracción I, que para efectos de lo anterior no se considerarán créditos los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes de ese mes. Explicó que se trata de una regla de control cuya finalidad es evitar que los créditos ajenos a la actividad del contribuyente, y que

puedan ser manipulados por éste, entren al cálculo de ajuste anual por inflación, porque de lo contrario se generaría un componente inflacionario que no concuerde con la realidad económica.

Refirió a los hechos que dieron origen a los asuntos resueltos por las Salas de la Suprema Corte, esto es, una aseguradora que alegó que el artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta carece de proporcionalidad porque no le permitía incorporar en el cálculo del artículo 46 las primas que se pagan por seguros. Consideró que si bien son cuentas por cobrar, no son créditos, tomando en cuenta que el contrato de seguro, si a los treinta días no se paga, la aseguradora no acude a un tribunal a cobrar el crédito, sino que el contrato deja de existir, en términos de lo establecido por el artículo 40 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

Estimó que las aseguradoras pueden generar activos como créditos y cuentas por cobrar para efectos del cálculo del ajuste anual por inflación, pero no los acumulan porque el sistema del Impuesto Sobre la Renta funciona con devengados, los cuales se acumulan en términos del artículo 18, fracción I, de la ley relativa, siendo una de las hipótesis la expedición de la factura, la cual generan cuando se les paga y no cuando firman el contrato; por ello, conforme al artículo 47, penúltimo párrafo, del ordenamiento citado, se considerarán como créditos desde de la fecha en que los ingresos correspondientes se acumulen y hasta la fecha en que se cobren, lo que significa que los ubican como créditos

bajo el esquema del primer párrafo del artículo 47, para efectos del cálculo como activos del ajuste anual por inflación.

Con esto, reiteró que el artículo 47 procura evitar que entren para el ajuste anual créditos que no reflejan la actividad del contribuyente, que no tienen una razonabilidad económica o que no reflejen actividades reales de mercado. Explicó que, de permitir que los créditos a plazo de un mes generen ajuste anual por inflación, las empresas otorgarían créditos a sus trabajadores por igual plazo y deducirían lo correspondiente.

Finalmente, anunció que estaría en favor del proyecto si se hicieran dos ajustes al texto de la tesis, primero, que los créditos previstos en el primer párrafo del artículo 47 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta son los que rigen y, segundo, que siempre y cuando dichos créditos sean necesarios e indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.

El señor Ministro Franco González Salas se posicionó en contra del proyecto porque consideró que los artículos analizados no violan el principio de proporcionalidad, ya que la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con las reformas de primero de enero de dos mil dos, sustituyó el cálculo mensual del componente inflacionario para determinar el interés deducible o acumulable o la ganancia o pérdida inflacionaria de los créditos o las deudas, por un solo cálculo al final del ejercicio del ajuste anual por inflación acumulable

o deducible, cuya finalidad era establecer una mecánica más simple denominada “ajuste anual por inflación”, aplicable únicamente a las personas morales del régimen general, lo que excluyó a las personas físicas.

Indicó que, dando una lectura diferente al artículo 46, fracción I, párrafo segundo, se resalta que el saldo promedio anual de los créditos o deudas es la suma total al día último de cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses del propio ejercicio del que se trate, y que no se incluye en ello el saldo del último día de cada mes de los intereses que se devenguen; con esto, concluyó que en el caso de créditos o deudas menores a un mes, independientemente si provienen de personas físicas con actividades empresariales, no existirá saldo alguno al final del mes que pueda tomarse en cuenta para determinar el mencionado saldo promedio anual; por ello, no compartió la conclusión del proyecto en el sentido de que los créditos menores a un mes en los que sean deudores personas diferentes a las físicas que no realizan actividades empresariales puedan tomarse en cuenta para efectos de calcular el componente inflacionario anual, por lo que tampoco resultaría acertado concluir que de cualquier forma impactan en el patrimonio de la persona moral.

El señor Ministro Aguilar Morales consideró atendible lo expuesto por el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena en cuanto a las aseguradoras, pero que no observa motivo en ello para estimar inconstitucional la disposición. Se manifestó

en desacuerdo con la conclusión del proyecto en el sentido de que, conforme al artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la exclusión de dichos créditos incrementará el ingreso acumulable, porque al haberse cubierto el crédito dentro del mes, no causó un impacto significativo para efectos del ajuste anual por inflación, que es la finalidad de la norma, y se pronunció en contra del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que, a pesar de haber votado por la inconstitucionalidad de la norma por violación al principio de proporcionalidad en la Sala atendiendo a las particularidades del caso, en el presente estimó que no se viola el principio de proporcionalidad tributaria, porque no se trata de un crédito para efectos del artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; consideró que la norma tiene una razonabilidad justificada, por lo que se manifestó en contra de la primera tesis del proyecto.

El señor Ministro Pérez Dayán analizó la razón por la que la Segunda Sala consideró que los gravámenes no resultaban violatorios de los principios constitucionales de los impuestos.

En primer lugar, precisó que el argumento central en torno al cual se determinó como proporcional fue el aspecto temporal, en el sentido de que la inflación se mide mensualmente a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor que refleja la pérdida de valor adquisitivo de la

moneda, lo que influye negativa o positivamente para efectos fiscales y sobre la contabilidad, ya sea para acumular ganancia inflacionaria o deducir la pérdida por el mismo fenómeno; por ello, si no se considerara el resultado fiscal podría no ser el real.

Resaltó que nuestra economía no maneja cantidades complejas de inflación pero que en otras puede variar el valor adquisitivo diariamente o aun con más frecuencia y, con base en este aspecto temporal, la Segunda Sala estableció por qué ciertas operaciones menores a un mes pueden no ser consideradas para efectos del ajuste inflacionario. Mencionó que, al determinar la Sala que, aun cuando no se diera la temporalidad del mes, sí había posibilidades de que las personas físicas que desarrollaran actividades empresariales podrían llevar a cabo un ajuste a partir de los créditos de un contribuyente, ya no se justificaba la idea de la temporalidad, sino la de que el ajuste podría efectuarse si se tratara de cualquier persona que no fuese física sin actividad empresarial. Por ello, encontró que el artículo 52, que quiso dar un tratamiento diverso a las instituciones de crédito, excluyendo a los restantes actores del entorno financiero, devenía desproporcional.

Aceptó la sugerencia de modificación del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, aduciendo que lograría con esto una interpretación conforme, a saber, una inconstitucionalidad condicionada a poder realizar un ajuste por inflación con créditos que provienen de personas físicas no dedicadas a

las actividades empresariales, siempre y cuando dichos créditos hayan sido indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, lo que impediría la simulación de pérdida inflacionaria; dicha modificación implicaría la interpretación tanto del artículo 47, fracción I, como del 52, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que únicamente se pronunció respecto de la proporcionalidad, no sobre la equidad.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que el argumento respecto de particulares no sería adecuado porque el tema era la capacidad contributiva del sujeto pasivo, por lo que debería estudiarse la afectación en ese sentido. Solicitó al señor Ministro ponente que, al haber invocado una interpretación conforme que involucraría que no se declarara inconstitucional el precepto analizado, precisara la propuesta para efecto de emitir su voto.

El señor Ministro Pérez Dayán atendió en primer lugar las aclaraciones de los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Franco González Salas. En cuanto a la primera, dijo que refirió a la mención que él hizo del criterio de la Primera Sala relativo a que las instituciones de seguros estaban o no incluidas, lo que revelaba un tema de equidad en torno al artículo 52, pero que no pretendía anticipar una opinión suya respecto del tema. Por lo que respecta a la segunda, precisó que la tesis se modificaría para el efecto de establecer que, en caso de créditos derivados de personas físicas con

actividades no empresariales con plazo menor a un mes, el contribuyente puede generar sobre ellos un ejercicio de ajuste por inflación, en tanto éstos sean necesarios e indispensables para los fines de la actividad del contribuyente; con ello se realizaría una interpretación conforme, en la cual se atenderían los dos fines del legislador: primero, de no obligar a que alguien tribute lo que no tiene y, segundo, impedir que se altere el resultado fiscal en beneficio del contribuyente con un componente inflacionario favorable.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó inconforme con la propuesta modificada del proyecto, en razón de que, atendiendo a lo establecido por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las condiciones de que el crédito sea mayor de un mes o cobrable dentro de un plazo mayor a un mes y la de que sean indispensables para el funcionamiento, son condicionantes, independientes y complementarias entre sí, por lo que no puede atenderse sólo a uno de ellos. Consideró que el hecho de que a las personas físicas se les presenten estas condiciones no es desproporcional porque los créditos no tienen un impacto inflacionario real, atendiendo al sistema de la ley que establece un cálculo mensual del impuesto, periodo que coincide con la determinación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Aclaró que la situación cambiaría si el sistema inflacionario modificara sus plazos, pero que, con los parámetros actuales, consideró proporcional el que no se incluyan dichos créditos porque no se causa el efecto de

pérdida de valor del ingreso y, por ende, no es inconstitucional.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena indicó que la tesis modificada se acerca al criterio del Tribunal Pleno en materia de deducciones estructurales y no estructurales. Realizó una reflexión acerca de la evolución de la economía mexicana, reseñando épocas pasadas en las cuales la inflación era extrema, disminuyendo el valor adquisitivo considerablemente en tan sólo un mes, pero no descartó la posibilidad de revivirlas, en cuyo caso sí tendría impacto real un crédito menor a un mes en la economía o el patrimonio de una persona moral. Se reiteró en favor de la interpretación conforme del proyecto modificado.

El señor Ministro Pérez Dayán respondió al argumento del señor Ministro Aguilar Morales en el sentido de que a la inversa, respecto del cálculo mensual de la inflación, la legislación sí establece la posibilidad de que se pueden considerar los créditos a cargo de personas físicas con actividades empresariales menores a un mes o los que provengan de personas morales para el cálculo de ajuste inflacionario, distinguiéndolos únicamente en razón del sujeto, cuestión que no encontró justificable.

Modificó la primera tesis del proyecto para darle el rubro *“RENTA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA ES VIOLATORIO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL NO CONSIDERAR COMO CRÉDITOS A AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS E*

INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE LA ACTIVIDAD DEL CONTRIBUYENTE MENORES A UN MES.”, con la finalidad de no establecer un supuesto absoluto de inconstitucionalidad ante la desproporcionalidad del precepto analizado.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea consideró que la propuesta modificada es aceptable y se pronunció en favor de ella.

El señor Ministro Franco González Salas señaló no estar de acuerdo con la modificación del proyecto, aunque se acerca al criterio sostenido por la Segunda Sala, en razón de que se está desplazando el problema a los casos concretos, ya que se tendría que acreditar si se está en el supuesto de la tesis para poder alegar desproporcionalidad; asimismo, manifestó dudas acerca del procedimiento que se seguirá en relación con el artículo 46 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El señor Ministro Presidente Silva Meza expresó dudas en el sentido de que la interpretación condicionada escapa de la litis de la contradicción e incluye un tema de legalidad de ese tipo de deducciones en función del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se pronunció en favor de la propuesta original que establecía la inconstitucionalidad del precepto con las consideraciones de la Primera Sala, y anunció que no compartiría el condicionamiento del proyecto modificado por atender a los casos concretos.

El señor Ministro Pérez Dayán precisó que el proyecto original declaraba la inconstitucionalidad y permitía que se incluyeran todos los créditos en el cálculo de la inflación, en tanto que la modificación del proyecto precisa que los créditos deberían ser indispensables para la empresa; por lo que sostuvo el proyecto modificado.

El señor Ministro Aguilar Morales precisó que había tres posturas: la propuesta original, la modificada y la contraria. Sugirió al señor Ministro ponente que las precisiones de la propuesta modificada que sostiene las remitiera a todos los señores Ministros para analizarlas con cuidado y divisar el alcance de la inconstitucionalidad, solicitando que el asunto quedara en lista.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán aceptó robustecer el proyecto para su posterior discusión y votación en la siguiente sesión que celebre de este Pleno.

El señor Ministro Presidente Silva Meza levantó la sesión a las doce horas con cincuenta y cinco minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión ordinaria del día lunes siete de octubre de dos mil trece a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.